



JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión núm. 33/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 5 de octubre de 2006, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

por el que se aprueba la

RESOLUCIÓN SOBRE EL CONFLICTO DE ACCESO ENTRE COMUNITEL GLOBAL S.A., Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE CABLE INTERNO

DT 2006/728

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Escrito inicial de Comunitel

Con fecha 26 de mayo de 2006, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones escrito de Comunitel Global, S.A. (en adelante, Comunitel) por el que plantea conflicto de acceso con la entidad Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, Telefónica). Comunitel manifiesta que Telefónica deniega reiteradamente el servicio de ampliación de Tendido de Cable Interno (TCI en adelante) en la central de Santa Coloma de Gramanet/Marina, donde ya se encuentra coubicado.

Comunitel indica que con fecha 15 de abril de 2004 procedió a solicitar coubicación en esta central, y que en las fechas 20 de diciembre de 2004 y 10 de mayo de 2005 solicitó un total de cuatro TCI que fueron efectivamente provistos. Sin embargo, con fecha 25 de enero de 2006, Comunitel remitió a Telefónica dos nuevas solicitudes de ampliación de TCI que no fueron provistas en plazo, lo que motivó el acceso al SGO por parte de Comunitel, donde pudo constatar que Telefónica, con fecha 15 de febrero de 2006, había procedido a cambiar el estado de la solicitud a *“en espera de resolución de Incidencia”* por *“falta de espacio en repartidor”*.

Según Comunitel, con fecha 20 de febrero de 2006 procedió a reclamar mediante correo electrónico la ampliación de TCI solicitada, obteniendo la respuesta de Telefónica con fecha 22 de febrero de 2006, en la que se indicaba que la incidencia se resolvería en abril. Sin embargo, con fecha 17 de mayo de 2006, Comunitel procedió nuevamente a reclamar la citada ampliación, respondiendo Telefónica que la provisión se efectuaría en la segunda quincena de junio. Comunitel indica que a fecha de 24 de mayo de 2006, momento en que firma su escrito, 129 clientes esperaban la prestación del servicio que Comunitel no pudo ofrecer debido al retraso en la provisión del TCI.



Comunitel solicita que se inste a Telefónica a proveer los servicios de ampliación de TCI solicitados para la central Santa Coloma de Gramanet/Marina y que sin perjuicio de la resolución que se apruebe, se adopten de forma inmediata medidas cautelares obligando a Telefónica a proveer dichos servicios. Asimismo demanda que se proceda a abrir expediente sancionador a Telefónica por incumplimiento de la OBA y de los apartados Séptimo y Noveno de la parte resolutive de la resolución de 9 de junio de 2005, por la que se resuelve el conflicto de acceso entre Jazz Telecom, S.A.U. y Telefónica de España, S.A.U. en relación con el cumplimiento de plazos en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (expediente DT 2005/259).

Segundo.- Comunicación de inicio del procedimiento

A la vista de la solicitud presentada por Comunitel esta Comisión, con arreglo a las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LRJPAC), procede a la incoación e instrucción del correspondiente procedimiento administrativo.

Con fecha 15 de junio de 2006 se comunica dicho trámite a los interesados, Comunitel y Telefónica, dirigiéndoles sendos escritos mediante los cuales se les informa de que, en virtud de la solicitud de intervención presentada por la primera, había quedado iniciado el correspondiente procedimiento administrativo.

Tercero.- Informe de los Servicios

Con fecha 6 de julio de 2006, los Servicios de la CMT emiten informe en el presente procedimiento donde se identifican las demoras provocadas por una provisión deficiente del servicio de TCI por parte de Telefónica y se establecen las penalizaciones que serían de aplicación.

Cuarto.- Trámite de audiencia

Por medio de sendos escritos recibidos respectivamente con fechas 19 de julio y 27 de julio de 2006, Comunitel y Telefónica formulan alegaciones en el trámite de audiencia concedido al efecto conforme al artículo 84 de la LRJPAC.

Alegaciones de Comunitel

Comunitel indica que con fecha 16 de junio de 2006 Telefónica procedió a comunicarle su disposición a llevar a cabo la efectiva prestación del servicio de TCI. No obstante, el operador manifiesta su conformidad con lo dispuesto en el informe de los Servicios de esta Comisión y se reafirma en su petición inicial referente a la apertura de expediente sancionador contra Telefónica por los incumplimientos en que ha incurrido.

Alegaciones de Telefónica

Telefónica afirma que las solicitudes de ampliación de TCI objeto del presente conflicto fueron provisionadas con fecha 16 de junio de 2006. Asimismo subraya las dificultades que en esta central planteaba la liberación de espacio en el repartidor, dada la situación excepcional de saturación debido a peticiones imprevisibles y no planificadas de ampliación de TCI por parte de los operadores.



Telefónica manifiesta que la liberación de espacio en el repartidor implica la ejecución de dificultosas actuaciones de obra civil que requieren de un período de tiempo considerable, dado que resulta imprescindible evitar que las citadas actuaciones causen interrupciones en el servicio proporcionado a sus clientes. Señala que para acometer la mencionada liberación optó por llevar a cabo el desmontaje del sistema MORE y la migración de los usuarios a tecnologías más compactas en términos de uso del repartidor, para lo cual ha seguido un calendario de actuaciones que se iniciaba con fecha 14 de febrero de 2006 con el corte de clientes MORE, realizándose el desmontaje de regletas el 21 de marzo y finalizándose los trabajos con fecha 25 de mayo de 2006. Finalmente, Telefónica indica que desde el momento en que se completó la liberación de espacio en el repartidor se procedió a realizar las actuaciones precisas para acometer la ampliación del TCI.

En referencia al uso efectivo de los TCI ya provisionados a Comunitel con anterioridad a la solicitud objeto de conflicto, Telefónica manifiesta que hasta la fecha en que se lleva a cabo la provisión de la ampliación solicitada, en ningún momento se ha alcanzado un grado de ocupación del 100%, hecho que demostraría que no se ha causado perjuicio alguno a Comunitel.

Finalmente, Telefónica expone la improcedencia del pago de penalizaciones por la situación de fuerza mayor sobrevenida al haberse producido la saturación del repartidor a causa de la demanda no planificada de los operadores. Según Telefónica, no puede constatar la concurrencia de dolo, culpa, negligencia o cualquier otra causa imputable a Telefónica, indispensables para la aplicación de penalizaciones; por el contrario, afirma que en todo momento se ha actuado con la diligencia exigible a un buen empresario.

Por todo lo expuesto, Telefónica solicita que se proceda a archivar el presente conflicto por desaparición sobrevenida del objeto y se desestimen íntegramente las peticiones de Comunitel.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Objeto del procedimiento

El presente procedimiento administrativo tiene por objeto el análisis del conflicto planteado en relación con el procedimiento de provisión del servicio de ampliación de tendido de cable interno (TCI) en la central Santa Coloma de Gramanet/Marina.

Segundo.- Habilitación competencial

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), en su artículo 48.2, indica que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá por objeto, entre otras cuestiones, el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y la resolución de los conflictos entre operadores. Dichas competencias generales se concretan en la habilitación competencial de esta Comisión para actuar en esta materia, recogida en el apartado 3, letra d) del mismo artículo, que establece que es función de esta Comisión la resolución vinculante de los conflictos que se susciten entre operadores en materia de acceso o interconexión.



La LGTel, en su artículo 11 apartado 4, establece que *“la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3.”* La letra a) del mencionado artículo 3 establece como objetivo de esta Ley, fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y, en particular, en la explotación de las redes y en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y en el suministro de los recursos asociados a ellos. A tal efecto, el artículo 14 de la LGTel señala que *“de los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso derivadas de esta ley y de sus normas de desarrollo conocerá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ésta, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo máximo de cuatro meses a partir del momento en que se pida su intervención, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.”*

De conformidad con lo anterior, esta Comisión tiene habilitación competencial suficiente para resolver el conflicto suscitado entre Comunitel y Telefónica.

Tercero.- Vigencia de las obligaciones de Telefónica en materia de acceso al bucle

Mediante Resolución del Consejo de la CMT de 11 de mayo de 2006, se define y analiza el Mercado 11 que hace referencia al acceso desagregado al por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles metálicos a efectos de prestación de servicios de banda ancha y vocales. En esta Resolución se determina que Telefónica tiene individualmente poder significativo en el mercado de referencia, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2, artículo 14, de la Directiva Marco, y en el Anexo 2, apartado 8 de la LGTel y en consecuencia, se imponen a Telefónica las obligaciones de acceso, orientación a costes, transparencia, separación de cuentas y no discriminación. La Resolución de 11 de mayo de 2006 ha sido publicada en el BOE de 24 de mayo de 2006. Las obligaciones impuestas a Telefónica son las siguientes:

- 1º. Obligación de proporcionar los servicios mayoristas de acceso completamente desagregado y parcialmente desagregado al bucle de abonado a todos los operadores, a precios regulados. La efectividad de esta obligación requiere de la imposición genérica de las siguientes imposiciones:
 - a) Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización (arts. 13.1d de la LGTel y 10 del Reglamento de Mercados; art. 12 de la Directiva de Acceso).
 - b) Ofrecer el servicio de acceso al bucle a precios orientados en función de los costes de producción (arts.13.1e de la LGTel y 11 del Reglamento de Mercados; art. 13 de la Directiva de Acceso) a los operadores de red fija que así lo soliciten.
 - c) Separar sus cuentas para sus actividades relacionadas con el acceso desagregado al bucle de abonado (arts. 13.1c de la LGTel y 9 del Reglamento de Mercados; art. 11 de la Directiva de Acceso).
- 2º. Obligación de transparencia en la prestación de los servicios de acceso desagregado al bucle de abonado. Telefónica está obligada a la publicación de una



oferta de Referencia para la prestación de los servicios de acceso al bucle de abonado suficientemente desglosada para garantizar que no se exija pagar por recursos que no sean necesarios para el servicio requerido (arts. 13.1 a) de la LGTel y 7 del Reglamento de Mercados; art. 9 de la Directiva de Acceso).

- 3º. Obligación de no discriminación en las condiciones de acceso desagregado al bucle. Obligación de no discriminación en las condiciones de acceso (arts. 13.1b de la LGTel y 8 del Reglamento de Mercados; art. 10 de la Directiva de Acceso).
- 4º. Determinación de las concretas condiciones de acceso al bucle de abonado.

Cuarto.- Resoluciones previas aplicables al servicio de provisión de TCI

En el escrito de Comunitel se hace referencia a anteriores resoluciones de conflictos relativos a la provisión del servicio de TCI, como es el expediente DT 2004/671, donde Telefónica solicitaba *“que se incluya una nueva causa de denegación de una solicitud de tendido de cable interno o en su caso un retraso en la provisión del servicio referente a la falta de espacio en el repartidor principal”*. Esta Comisión resolvió sobre la improcedencia de denegar o retrasar la prestación del servicio de TCI por causa de falta de espacio en el repartidor y sobre la obligación de Telefónica de planificar los recursos en las centrales donde los operadores se encuentran coubicados, al establecer en su Resolución de 1 de julio de 2004 que:

“... La CMT estima que la provisión de espacio de coubicación en una central debe estar ligada a la disponibilidad de espacio en el repartidor que permita la prestación de servicios de acceso desagregado sobre dicha central. Es decir, la simple petición de espacio de coubicación en una central debería llevar asociada una disposición de recursos en el repartidor principal, lo cual puede llevar aparejada la ampliación de dicho repartidor o la optimización de espacio sobre el repartidor existente. No resulta aceptable, por tanto que, una vez acabada la habilitación de un espacio de coubicación, Telefónica alegue falta de capacidad en el repartidor para negar o retrasar el servicio de tendido de cable interno al operador coubicado. Deberían por tanto iniciarse las actuaciones necesarias para habilitar espacios en el repartidor principal desde el mismo momento que se acepta el proyecto de coubicación y siempre con el objeto de evitar demoras en la provisión de los servicios asociados de acceso al bucle de abonado”.

Asimismo, Comunitel remarca la Resolución de 9 de junio de 2005 en la que se resolvía el conflicto en relación con el cumplimiento de plazos en la OBA, enmarcado en el expediente DT 2005/259:

“Pues bien, como ya se ha señalado, esta Comisión ya dejó meridianamente claro que no puede bloquearse el acceso al bucle por una deficiente o discriminatoria gestión de los recursos de red, sino que compete a Telefónica estar en condiciones de proveer los servicios de su oferta de referencia.

Esta Comisión ya dio a Telefónica el pasado mes de julio la indicación inequívoca de que no puede rechazar peticiones de tendido por causas no recogidas en la OBA, y por tanto tampoco con motivo de la saturación del repartidor, por lo que desde principios de julio Telefónica era consciente de que tenía la obligación de planificar la disponibilidad de recursos en los repartidores principales de las centrales por las que los operadores se interesaban”.



Los resuelve Séptimo y Noveno de esta resolución imponían a Telefónica la obligación de no rechazar o retrasar solicitudes de tendido de cable interno por causas no recogidas expresamente en la OBA:

“Séptimo.- Instar a Telefónica de España, S.A.U., a disponer todos los medios necesarios para cumplir los plazos previstos en la OBA, en particular los plazos de entrega de solicitudes de tendido interno, y los plazos de entrega de solicitudes de prolongación de par.

Noveno.- Instar a Telefónica de España, S.A.U., a no rechazar solicitudes de los servicios de tendido interno y de tendido externo por causas no recogidas en la OBA, como en particular la saturación del repartidor principal, y a adoptar las medidas que sean necesarias para estar en condiciones de suministrar con normalidad conforme a lo previsto en la OBA los servicios de tendido de cable interno y de tendido de cable externo, a los que serán de aplicación las penalizaciones previstas.”

Quinto.- Plazos aplicables a la provisión del servicio de TCI

En lo concerniente al servicio de ampliación de TCI la OBA establece que Telefónica debe proceder a la aceptación de la solicitud en un plazo máximo de 5 días laborables tras su validación y envío vía web, y seguidamente a la entrega efectiva del servicio en el plazo de 6 días tras la aceptación de la solicitud, o bien de 10 días cuando la ampliación implique nueva infraestructura.

En el caso que nos ocupa, Comunitel procedió a solicitar la ampliación de TCI en la central Santa Coloma de Gramanet/Marina de conformidad con lo establecido en el apartado 1.5.2 de la OBA, referente al procedimiento de TCI, con fecha 25 de enero de 2006. Por consiguiente la aplicación de los plazos establecidos implicaría la aceptación de la solicitud con fecha 1 de febrero de 2006. Asimismo, considerando que la ejecución de la ampliación requiere de nueva infraestructura para acometer la habilitación de espacios en el repartidor principal, la entrega efectiva del servicio debió realizarse con fecha 15 de febrero de 2006.

Sexto.- Retrasos en la provisión del servicio de TCI

En lo concluido en las resoluciones referenciadas por Comunitel y resumidas en el fundamento Cuarto se establecen determinadamente ciertas obligaciones de Telefónica concernientes a la provisión del servicio de TCI en condiciones de saturación del repartidor principal. En efecto, en tales circunstancias se establece que Telefónica debe realizar las actuaciones necesarias para habilitar espacios en el repartidor principal, así como la planificación de la disponibilidad de recursos, y no se consiente el rechazo de peticiones de tendido por causas no recogidas en la OBA, como sería la situación de saturación del repartidor. En el caso que nos ocupa se ha podido constatar que Telefónica no ha cumplido con su obligación de planificar anticipadamente los recursos disponibles, lo que claramente constituye un incumplimiento de las resoluciones referenciadas que ha provocado, en última instancia, la imposibilidad de cursar de forma inmediata la solicitud de Comunitel, con el consiguiente retraso en la entrega del servicio.

En consecuencia, se aprecia claramente que no han concurrido las causas de denegación contempladas en la OBA para este procedimiento, y se considera que Telefónica, esgrimiendo como causa del rechazo de la solicitud de Comunitel un



argumento no admitido en la OBA ni en las citadas resoluciones, ha provocado un retraso considerable en la provisión del servicio de ampliación de TCI.

Por otra parte, del calendario de actuaciones referente al procedimiento de liberación de espacio en el repartidor efectuado por Telefónica se desprende que transcurren cuatro meses desde el instante en que se inicia el citado proceso, con el corte de clientes MORE, hasta la fecha en que se provisiona a Comunitel el servicio de TCI. Al respecto cabe recalcar lo acontecido en el marco del expediente DT 2006/209, en el que se resolvía sobre el conflicto de acceso de similares características entre Telefónica y Comunitel en relación con la provisión del servicio de TCI, y que concluía con la apertura de expediente sancionador contra la primera. En dicho conflicto se pudo constatar que Telefónica había acometido un proceso de liberación de espacio en el repartidor basado en el desmontaje del sistema MORE y la migración de los usuarios a tecnologías más compactas, de gran similitud al circunscrito en el presente conflicto, proceso que Telefónica consumó en un plazo inferior a un mes.

Teniendo en consideración que las centrales Santa Coloma de Gramanet/Marina y Granada/Triunfo, esta última objeto del citado conflicto DT 2006/209, son de igual magnitud en términos de número de bucles de abonado (28.000 frente a 29.000 pares en servicio según información remitida por Telefónica derivada de las obligaciones OBA) y, por consiguiente, guardarían un nivel de dificultad similar en lo referente a la ejecución de un procedimiento de liberación de espacio en el repartidor, cabría esperar plazos de ejecución similares. No obstante, en la central objeto del actual conflicto se ha cuadruplicado el período de realización del citado procedimiento, por lo que debe concluirse que la actuación de Telefónica no ha demostrado la debida diligencia y ha contribuido a aumentar la demora causada a Comunitel.

Séptimo.- Sobre la planificación de los recursos

Telefónica expone en sus alegaciones al trámite de audiencia que la falta de una demanda planificada por parte de los operadores impide que pueda efectuar una gestión válida de los recursos disponibles, especialmente los relativos a la provisión del TCI como sería el espacio en el repartidor principal, lo que deriva en la saturación del mismo. Adicionalmente remarca la falta de racionalidad de las peticiones de Comunitel, aportando una serie de datos que muestran que hasta la fecha en que se lleva a cabo la provisión de la ampliación solicitada, en ningún momento el grado de ocupación de los TCI ya provisionados ha alcanzado el 100%. De los citados datos se desprende también que el grado de ocupación de los TCI asignados a Comunitel tras la provisión efectuada con fecha 16 de junio de 2006 no ha superado el 53%. Los porcentajes de ocupación aportados vendrían a constatar, según Telefónica, que no se ha causado ningún perjuicio a Comunitel.

En relación con este punto se ha podido constatar que con fecha 24 de mayo de 2006, según Comunitel, debido a la demora en la provisión de la ampliación del TCI, 129 clientes se encontraban a la espera de recibir la prestación del servicio; por otra parte, de los datos aportados por Telefónica se desprende que en la citada fecha el porcentaje de ocupación de los TCI era del 78%, lo que implicaría, teniendo en cuenta criterios razonables de planificación de red, la práctica saturación de los recursos de Comunitel y por consiguiente una insuficiencia de recursos disponibles para que el operador efectuase la prestación del servicio a sus clientes. En consecuencia, se



estima que la actuación de Telefónica podría haber causado un cierto impacto en la estrategia comercial de Comunitel.

Por otra parte, ya se ha expresado claramente que Telefónica debe llevar a cabo las actuaciones necesarias para habilitar espacios en el repartidor principal, así como la planificación de la disponibilidad de recursos, no siendo aceptable el rechazo de peticiones de TCI por causas no recogidas en la OBA, como sería la situación de saturación del repartidor. La carencia de una planificación vinculante por parte de los operadores o la supuesta falta de racionalidad de las peticiones de TCI debido al escaso grado de ocupación de los ya asignados no pueden admitirse como causas justificables de rechazo de las solicitudes de TCI. En efecto, la OBA vigente contempla únicamente la asignación de recursos en función de la demanda de los operadores, independientemente de otras consideraciones como sería el criterio de uso efectivo de los recursos conforme al grado de ocupación de los ya asignados.

En consecuencia, el grado de ocupación de los TCI provisionados a los distintos operadores no debe constituir el factor que determine la necesidad de llevar a cabo acciones dirigidas a acometer la ampliación del repartidor principal. Tal como se desprende de lo establecido en la OBA y lo expresado en el párrafo anterior, el criterio que Telefónica debe tener en consideración no es el grado de ocupación de los TCI provisionados a los operadores, sino el nivel de saturación del propio repartidor.

Adicionalmente, cabe destacar que no se tiene constancia de que el estado de saturación del repartidor principal haya afectado a la propia Telefónica, como sí lo ha hecho a Comunitel, lo que vendría a agravar las deficiencias del servicio prestado por Telefónica y supondría una clara falta de diligencia en la planificación de los recursos y un indicio de posible actitud discriminatoria por no haber prestado a Comunitel el servicio de ampliación de TCI en las mismas condiciones en que se lo hubiese prestado a sí misma.

Octavo.- Penalizaciones por incumplimientos

Según lo expuesto en las alegaciones de Telefónica, la no concurrencia de dolo, culpa, negligencia o cualquier otra causa imputable al operador justificarían la improcedencia de la aplicación de penalizaciones. En este sentido, Telefónica señala que no puede demostrarse la existencia de dolo dado que ninguna conducta maliciosa puede reprochársele; asimismo afirma que debe descartarse la existencia de culpa o negligencia puesto que Telefónica ha mostrado la diligencia propia de un buen empresario.

Al respecto cabe decir que, en cualquier caso, ya se ha justificado que es indiscutible la responsabilidad de Telefónica en el incumplimiento de los plazos de provisión, y esa responsabilidad es el único elemento determinante que genera la obligación de pago de penalizaciones, sin que a estos efectos sea necesario precisar si dicha responsabilidad deriva de dolo, culpa o negligencia. Asimismo, ha quedado acreditado que Telefónica no ha mostrado la misma diligencia que emplearía para sí misma en la provisión de los servicios demandados por Comunitel, por lo que no podría probar su falta de culpa en los retrasos provocados, salvo demostrando la concurrencia de causas de fuerza mayor u otras ajenas que, por los motivos expuestos, no resultan admisibles.



Por lo expuesto, debe concluirse que Telefónica ha causado una demora considerable en la aceptación de la solicitud de TCI cursada por Comunitel, con el consiguiente retraso en la entrega efectiva del servicio. Deberá aplicarse la penalización prevista en la OBA al respecto, teniéndose en cuenta para el cálculo del importe el plazo comprendido entre las fechas 15 de febrero de 2006 y 16 de junio de 2006, momento en que se lleva a cabo la provisión del servicio por parte de Telefónica.

Noveno.- Adopción de medidas cautelares

No procede la adopción de medidas cautelares dado que se ha constatado que el servicio de ampliación de TCI ya ha sido provisionado.

Décimo.- Indicios de hechos sancionables

Esta Comisión estima que existen indicios suficientes de incumplimiento, por cuanto que de las actuaciones realizadas se desprende que Telefónica ha rechazado peticiones de TCI por causas no recogidas en la OBA, como sería la situación de saturación del repartidor principal, y ha demostrado una considerable falta de planificación de la disponibilidad de recursos, incumpliendo también lo establecido en la Resolución de 9 de junio de 2005 en la que se resolvía el conflicto en relación con el cumplimiento de plazos en la OBA (expediente DT 2005/259). Por ello se considera que, con carácter previo, es posible poner de manifiesto que Telefónica podría haber incumplido el primer apartado de la Resolución de 31 de marzo de 2004, sobre la modificación de la OBA en relación con la atención de las solicitudes del servicio de TCI.

Por consiguiente, esta Comisión considera que está justificado trasladar las actuaciones practicadas para su consideración en el procedimiento sancionador RO 2006/996 seguido en esta Comisión por el supuesto incumplimiento por parte de Telefónica de su oferta de referencia de acceso al bucle¹.

En razón de todo lo anterior, esta Comisión

RESUELVE

Primero.- Instar a Telefónica a abonar a Comunitel, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de esta Resolución, las penalizaciones debidas conforme a lo dispuesto en la OBA por incumplimiento del plazo de entrega del servicio de ampliación de TCI.

Segundo.- Trasladar las actuaciones practicadas durante la tramitación de este expediente para su consideración en el marco del procedimiento sancionador RO 2006/996, iniciado por la Resolución de fecha 20 de julio de 2006, por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra Telefónica por el presunto

¹ Procedimiento sancionador iniciado por la Resolución de fecha 20 de julio de 2006 por el supuesto incumplimiento por parte de Telefónica de los apartados Primero y Segundo de la Resolución de 31 de marzo de 2004, de modificación de la OBA.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

incumplimiento de los apartados Primero y Segundo de la Resolución de 31 de marzo de 2004, de modificación de la OBA.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Marcel Coderch Collell

P.S. art. 39 R.D. 1994/1996 de 6 septiembre
(B.O.E. de 11 de abril de 1997)